

Señores

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL – BOGOTÁ.

E. S. D.

**REFERENCIA:** ACCIÓN DE TUTELA

**ACCIONANTE:** MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A Y MAPFRE  
COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.

**ACCIONADO:** SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES.

**ASUNTO: SOLICITUD DE MEDIDA DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL**

**GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.395.114 de Bogotá, abogado titulado y en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 39.116 del C. S. de la J., con dirección de notificaciones electrónicas [notificaciones@gha.com.co](mailto:notificaciones@gha.com.co), obrando en mi calidad de apoderado general de **MAPFRE SEGUROS GENERALES COLOMBIA S.A.** sociedad legalmente constituida, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, identificada con NIT 891.700.037-9, y **MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.**, sociedad legalmente constituida, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, identificada con NIT. 830.054.904-6, según consta en los Certificados de Existencia y Representación Legal expedidos por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Superintendencia Financiera de Colombia que se anexan, en ejercicio del derecho consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentado por el Decreto 2591 de 1991. Por medio del presente escrito de manera respetuosa me dirijo a ustedes con el fin de presentar **SOLICITUD DE MEDIDA DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL** de la audiencia programada para el día 11 de diciembre de 2024 a las 8:30 a.m., dentro del proceso No. 2023-800-00074 que cursa en la Superintendencia de Sociedades, puesto que al interior de dicha audiencia se pretende practicar las pruebas testimoniales que fueron aceptadas en el proceso y se prescindirá del testimonio de Karen Yissela Torres, hecho que sustenta la interposición de esta acción de tutela y que debe evitarse a fin de salvaguardar los derechos de defensa, administración de justicia y debido proceso de mis representadas. Lo anterior, conforme los argumentos que se exponen a continuación:

**I. PROCEDENCIA DE LA MEDIDA DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LA AUDIENCIA PROGRAMADA PARA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2024.**

En virtud de lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, por ser necesarias y de ostensible urgencia para la protección de los derechos fundamentales de mi representada, así como para evitar la materialización de un perjuicio inminente e irremediable, respetuosamente solicito al Despacho ordenar como medida provisional que se suspenda provisionalmente la realización de la

audiencia programada para el día 11 de diciembre de 2024 a las 8:30 a.m., dentro del proceso número 2023-800-00074 que cursa en la Superintendencia de Sociedades, diligencia en la que se pretende practicar las pruebas aceptados dentro del litigio.

Como consecuencia de los hechos narrados en la acción de tutela, el suscrito procede a solicitar al Despacho el decreto de una medida provisional de suspensión de la audiencia programada dentro del proceso No.2023-800-00074, puesto que al celebrarse dicha diligencia sin la posibilidad de efectuar el interrogatorio a la señora Karen Yissela torres, se incurre en la siguiente vía de hecho:

- Defectos fácticos:

-Falta de valoración frente a la relevancia del testimonio: No existe un testigo con las características y conocimientos suficientes que pueda sustituir el testimonio de la señora Karen Yissela Torres Vera, pues debido a su confianza y rol dentro de la sociedad Insurance (demandada en la acción de desestimación de la personalidad jurídica) se encargaban de varias gestiones de tal naturaleza que solo un cargo de dirección, manejo y confianza tendría, por lo que es la única que podría detallar la operación de colocación de las pólizas cuyos aseguradores eran mis prohijadas, pues era quien tenía el manejo de los usuarios auxiliares por donde se realizaba el proceso de legalización y coordinaba las gestiones que realizaban otros trabajadores de la sociedad, además es quien puede ilustrar al Despacho sobre el proceso de recaudo de las primas con ocasión al objeto social de la sociedad Insurance, es decir como agencia colocadora de seguros, por ende a la luz de los hechos que se pretenden demostrar en el litigio, su testimonio tiene gran relevancia y es determinante para soportar las operaciones internas de dicha sociedad, y llevar al juzgador al real convencimiento sobre lo sucedido.

-Omisión de hechos relevantes: Al negarse la practica el testimonio de la señora Torres Vera sin evaluar exhaustivamente su importancia, se están omitiendo hechos críticos que solo ese testigo podría aclarar. Esto afecta la completa y correcta valoración de los hechos del caso.

- Defectos Sustantivos:

-Violación del derecho a la defensa y al debido proceso: Al negar la práctica del testimonio de la señora Torres Vera, se afecta sustancialmente el derecho de mis representadas a presentar pruebas esenciales para demostrar su teoría del caso y por ende sustentar sus pretensiones, tal como lo establece el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. Es decir que aunque al juzgador le está permitido limitar la práctica de los testimonios cuando encuentre suficientemente acreditado un presupuesto de hecho, lo cierto es que ese criterio no se cumple en el caso de marras, toda vez que las pruebas testimoniales aún están pendientes de práctica y por ende no es posible limitar la recepción de ese testimonio,

aunado al hecho de que es importante que no dejar de lado que mi representada no ha desistido de esa prueba, y el Despacho no podía excluir el testimonio cuando en auto anterior ya lo había decretado, es decir cuando esa decisión ya estaba en firme.

-Violación a la defensa y acceso a la administración de justicia en condiciones de igualdad:

La negativa de la Superintendencia de Sociedades a la práctica del testimonio de Karen Torres, demuestra que existe una errada interpretación y/o aplicación del derecho a la no incriminación de la testigo, puesto que se utilizó como fundamento para negar la práctica de la prueba, cuando la realidad es que el Código General del proceso no faculta al juez para negar el testimonio de una persona por ese motivo, es decir no existe como causal para el rechazo de la prueba o para prescindir de aquella el sustento efectuado por la Superintendencia de Sociedades, por lo tanto el hecho de negar la práctica del testimonio deja a mi representada sin las pruebas que pretende hacer valer en juicio, es decir que desconoce la carga de la prueba que pretenden cumplir mis mandantes, a quienes en auto anterior ya se les había decretado la prueba pero que posteriormente la delegatura para asuntos mercantiles de la superintendencia decidió desconocer y abstenerse de practicar una prueba debidamente solicitada y decretada. Negar el testimonio que sustenta la tesis de mis representadas sin duda compromete el acceso a la administración de justicia y su derecho de defensa, en tanto se le está vedando la posibilidad de hacer uso de los medios de convicción que tiene el ordenamiento jurídico, y bajo un supuesto que erradamente se está imponiendo por parte de la Superintendencia de sociedades, quien en su calidad de director del proceso, bien puede tomar las medidas para no comprometer el derecho a la no autoincriminación de la testigo pero no puede negar o prescindir de la prueba, so pretexto de dicho derecho, máxime cuando la Superintendencia de Sociedades no se encuentra indagando o estableciendo la comisión de delitos, sino que conoce de un proceso de naturaleza privada cuya pretensión es la desestimación de la personalidad jurídica de las dos sociedades demandadas dentro de ese asunto, es decir que no es de su resorte la investigación delictual, y por lo tanto no puede negar la práctica del testimonio.

-Interpretación Errónea de la Normativa: La jurisprudencia ha indicado que la situación penal de un testigo no impide su declaración dentro de un proceso. La Superintendencia de Sociedades cometió un error al no considerar correctamente la jurisprudencia y la norma. Es primordial reconocer que el derecho a la no autoincriminación surge en el marco de los procesos penales, a fin de garantizar que los implicados no se vean sometidos a confesiones o aceptación de delitos bajo escenarios que comprometan su voluntad, por lo tanto es un aspecto ajeno al proceso civil como el de la desestimación de la personalidad jurídica, empero existen pronunciamientos de jueces en los cuales no se ha rechazado la práctica de un testimonio por el simple hecho de que el testigo tenga en curso un proceso de investigación penal, pues en efecto sustraer del análisis del juzgador este tipo de

declaraciones de aquellas personas que tienen conocimiento directo de los hechos objeto del proceso declarativo sería tal como negar la justicia, negar la prueba es negar la justicia, máxime cuando mis representadas haciendo uso de sus derechos pidieron oportunamente el testimonio de Karen Yisella Torres y la Superintendencia de Sociedades lo había decretado, es decir cuando existía una decisión en firme que decretó la prueba, no podía prescindirse de la prueba.

Además, esta solicitud es procedente, comoquiera que, existe una amenaza inminente ocasionada por la sustracción de los derechos de mi representada al negarse la práctica de un testimonio de tal calidad para el proceso como lo es el de la señora Karen Yissela Torres Vera. Ante la existencia de la mencionada afectación, la Jurisprudencia ha entendido que procede el decreto de medidas provisionales en sede de tutela:

*“(...) Ahora bien, la facultad de proferir medidas provisionales se encuentra habilitada desde la presentación de la acción de tutela hasta antes de proferir sentencia, “pues al resolver de fondo deberá decidir si tal medida provisional se convierte en permanente, esto es, definitiva o si, por el contrario, habrá de revocarse.” Las medidas provisionales no tienen por objeto anticipar o condicionar el sentido del fallo e incluso pueden ser reversadas en algunos casos. **Por el contrario, sirven como una herramienta excepcional al del juez constitucional, cuando este advierta que una amenaza cierta, inminente y grave sobre un derecho fundamental o el interés público requiera su intervención inmediata** (...)”<sup>1</sup> (Subrayado y negrilla fuera del texto original)*

Aunado a lo anterior, en el presente caso se cumplen los requisitos para que se suspenda la realización de la audiencia programada para el día 11 de diciembre de 2024 a las 8:30 a.m., toda vez que tiene como fin evitar que se agrave una situación consistente en la vulneración al derecho a la defensa, el debido proceso y el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, debido a la falta de la practica de la prueba testimonial de la señora Karen Yissela Torres, quien es un testigo fundamental para mis pro hijadas por las labores que desempeñó en las empresas demandadas en el proceso número 2023-800-00074 que cursa en la Superintendencia de Sociedades, hecho que podría verse consumado en la realización de la diligencia citada dentro del proceso en mención. Frente a este particular, la Corte Constitucional ha sostenido que el decreto de medidas provisionales es procedente cuando existe una amenaza latente de vulneración de los derechos fundamentales, esto con el fin de evitar que dicha amenaza se concrete.

**“(...) La Corte Constitucional ha sostenido que resulta procedente el decreto de medidas provisionales: “(i) cuando éstas resultan necesarias para evitar que la**

<sup>1</sup> Corte Constitucional, Auto 259 del 2021, M.P. Diana Fajardo Rivera.

**amenaza contra el derecho fundamental se concrete en una vulneración o;** (ii) cuando, constatada la ocurrencia de una violación, sea imperioso precaver su agravación”. Esto por cuanto la potestad de decretar medidas provisionales tiene como finalidad “proteger los derechos constitucionales fundamentales, antes de pronunciarse definitivamente en el fallo, pues con ella se busca evitar que la amenaza contra el derecho fundamental se convierta en violación o, habiéndose constatado la existencia de una violación, que ésta se torne más gravosa (...)”<sup>2</sup> (Subrayado y negrillas fuera del texto original)

Adicionalmente, en el presente caso, el despacho podrá constatar que “(i) la afectación al derecho fundamental es plausible; (ii) que el transcurso del tiempo pone en riesgo dicha garantía constitucional; y (iii) la medida cautelar no generaría un daño desproporcionado a quien debe soportarla”<sup>3</sup>, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. La Superintendencia de Sociedades decidió prescindir de la práctica testimonial de la señora Karen Yissela Torres Vera, lo que demuestra una incorrecta valoración de la relevancia de su testimonio y una interpretación errónea de la normativa vigente y de la jurisprudencia relevante para el caso, lo que indujo a la delegatura a violentar los derechos fundamentales de mis prohijadas. Incurriendo así en defecto fáctico y sustantivo.
2. El transcurso del tiempo en el presente caso implicaría que practiquen las pruebas decretadas en el caso, que se cierre el debate probatorio, se dicte sentencia y mi prohijada no pueda cumplir con la carga probatoria que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso.
3. El decreto de la medida provisional solicitada no genera ningún daño ni afectación a los demandados INSURANCE PROFESSIONALS BROKER LTDA, MEGASOAT LTDA, WILFREDO ORTEGA TRIASNAS y DANIEL ORTEGA TRIANA, comoquiera que, la medida no está imponiendo cargas desproporcionadas más que la espera a la resolución de la acción constitucional antes de la realización de la diligencia por medio de la que se pretende practicar los testimonios aceptados y decretados dentro del proceso No. 2023-800-00074. Luego, si se llegare a realizar tal audiencia y se cerrara el debate probatorio, se perfeccionaría la vulneración de los derechos fundamentales de mis representadas.

## II. PETICIÓN

En virtud de lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, por ser necesarias y de ostensible urgencia para la protección de los derechos fundamentales de mis representadas, así

<sup>2</sup> Corte Constitucional, Sentencia SU – 096 del 17 de octubre de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

<sup>3</sup> Corte Constitucional Auto A – 826 del 26 de octubre de 2021, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.



como para evitar la materialización de un perjuicio inminente e irremediable, respetuosamente solicito al Despacho:

**PRIMERO: ORDENAR** como medida provisional que se suspenda provisionalmente la realización de la audiencia programada para el día 11 de diciembre de 2024 a las 8:30 a.m., dentro del proceso número 2023-800-00074 que cursa en la Superintendencia de Sociedades hasta tanto se emita una sentencia de fondo y ejecutoriada en el presente tramite constitucional.

**SEGUNDO:** Subsidiariamente, en caso de no atender la primera solicitud, comedidamente pido al juez que en su calidad de guardián de la constitución ordene a la Superintendencia de Sociedades que en el marco del proceso 2023-800-00074 no clausure el debate probatorio en la audiencia del 11 de septiembre de 2024 y por supuesto no continúe con las etapas subsiguientes como alegatos y fallo, hasta tanto el juez de tutela no dirima esta acción.

### III. NOTIFICACIONES

- El suscrito apoderado, en la Calle 69 No. 4-48 Oficina 502 de la ciudad de Bogotá y en la dirección de correo electrónico [notificaciones@gha.com.co](mailto:notificaciones@gha.com.co).
- MAPFRE SEGUROS GENERALES COLOMBIA S.A., en la carrera 14 # 96-34 de la ciudad de Bogotá y en la dirección de correo electrónico [njudiciales@mapfre.com.co](mailto:njudiciales@mapfre.com.co).
- MAPFRE SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A. en la carrera 14 # 96-34 de la ciudad de Bogotá y en la dirección de correo electrónico [njudiciales@mapfre.com.co](mailto:njudiciales@mapfre.com.co).
- SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, en Av. El Dorado No. 51-80 Bogotá, D.C., y en la dirección de correo electrónico [notificacionesjudiciales@supersociedades.gov.co](mailto:notificacionesjudiciales@supersociedades.gov.co).

Cordialmente,



**GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA**

C.C No. 19.395.114 de Bogotá D.C

T.P. No. 39.116 del C.S. de la J.